



Sabine Riedel

Secesión o solidaridad

Ambas cosas no conseguirá Cataluña ¹

Desde el arresto de Carles Puigdemont, ha surgido un movimiento de solidaridad que ve al expresidente catalán como una víctima del poder judicial. Pero incluso si Alemania impide la extradición, esto difícilmente afectará los juicios de los políticos regionales encarcelados en Madrid. El fiscal español acusa a los acusados de rebelión y de apropiación indebida de fondos. Se dice que los separatistas han desviado fondos del fondo de liquidez de la comunidad autónoma (FLA) para su campaña de independencia. Desde la crisis financiera de 2012, Madrid ha tenido que prestar créditos a regiones sobreendeudadas, incluida Cataluña. Barcelona recibe entre 6.7 (2012) y 11.1 mil millones de euros (2015) anualmente. Esta dependencia financiera es otro motivo para que Cataluña se esfuerce por la autosuficiencia, ya que promete el acceso directo al Banco Central Europeo (BCE). Es por eso que los europeos deberían pensar a quién dar su solidaridad. Un estado catalán nacería con una montaña de deuda, que en última instancia tendrían que asumir las otras regiones españolas y el contribuyente europeo.

El 27 de octubre de 2017, el gobierno central español intervino la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la Constitución. Incluso Madrid dejó claro que el conflicto de secesión no puede resolverse con esta medida. Más bien, unas nuevas elecciones deben dar a todos los involucrados la oportunidad de "salvar los muebles" y volver al diálogo. Ya el 10 de octubre de 2017, el Primer Ministro Mariano Rajoy había acordado establecer una comisión propuesta por el líder socialista Pedro Sánchez de desarrollar un concepto de cambio del sistema de autonomías español. Si bien las otras comunidades autónomas en España aspiran a un mayor autogobierno financiero.

Aunque esta oferta concreta llegó bastante tarde, Madrid se mantuvo, por así decirlo, aguantando. Carles Puigdemont y su depuesto gobierno regional hasta ahora no lo había aceptado. En su lugar, firmaron una declaración de independencia para Cataluña el mismo día. Una vez más, demostraron su difícil posición de querer negociar sólo sobre la soberanía. En su opinión, todos los puentes con el gobierno central ya se habían roto. Las discusiones sólo se podrían llevar a ca-

bo sobre las modalidades de secesión. En el curso de tales negociaciones, se dividirá el espacio económico, que ha ido creciendo durante siglos, en muy poco tiempo.

Puigdemont en el "Exilio" de Bruselas

Hasta ahora, el gobierno regional catalán carece de la base legal necesaria y de la legitimidad democrática para una secesión. Se basa únicamente en su sentido de la justicia y en la convicción difusa de que Europa tiene un sentido de la justicia para su movimiento de independencia. El silencio de las instituciones de la UE en el período previo al controvertido referéndum del 1 de octubre de 2017 podría interpretarse como una solidaridad encubierta. Sólo diez días después, del día de la firma de la declaración de independencia, el presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, se dirigió al Parlamento catalán. Pidió a los diputados que renuncien a sus planes y busquen una solución constitucional en el Diálogo con Madrid.

Se tuvo la sensación de como si estas palabras claras hicieran pensar al presidente catalán

¹ Traducción del texto original: Sabine Riedel, [Sezession oder Solidarität. Beides zusammen wird Katalonien nicht bekommen](#), Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, SWP-Aktuell, Nr. 25, Mai 2018, [Traducción al inglés](#), May 2018.

Puigdemont. Vaciló, en realidad al declarar la independencia. Por lo que sabía de la amenaza de consecuencias legales a nivel europeo. Con la separación de España, Cataluña se separaría inevitablemente de la UE. Por lo tanto, los separatistas no han puesto en vigor la Declaración de Independencia. Detrás de esto está la estrategia de provocar una escalada crítica de la situación para obtener un estatus especial para Cataluña por parte de la UE. Bruselas aceptará la secesión sin que el estado recién creado tenga que abandonar la Unión. Por lo tanto, Madrid no recibió ninguna respuesta de los líderes catalanes sobre si la independencia se llevó a cabo o no. Después de 17 días, el gobierno español puso fin a este estado de abandono. Suspendió temporalmente la autonomía y suspendió al gobierno regional.

Puigdemont pudo escapar del arresto estableciéndose en Bélgica con algunos ministros. Los únicos políticos que recibieron a los refugiados con los brazos abiertos fueron los representantes de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), que también están buscando la independencia de su región flamenca belga. Su solidaridad espontánea con los separatistas de Cataluña, sin embargo, se basa en una larga cooperación. Junto con el Partido de la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el partido del exministro titular de Finanzas y Economía, Oriol Junqueras, el N-VA es parte de una red europea de partidos separatistas, la llama da Alianza Libre Europea (ALE o EFA en inglés) y que está representado actualmente por 11 diputados en el Parlamento de la UE.

Por ejemplo, desde finales de octubre de 2017, los miembros de la ALE no sólo han otorgado a Puigdemont y sus ministros el "asilo", organizan desde Bruselas también la resistencia contra su juicio político. Utilizan una retórica que debería sacudir la confianza del público europeo en el sistema judicial español. Una vez, llaman a España un sistema "neofranquista" y exigen la exclusión del país de la UE (ALE, 1.10.2017), otra vez hablan de una "Erdoganización" (ALE, 24.3.2018). Al hacerlo, colocan a Mariano Rajoy y su gobierno en minoría a semejanza del presidente turco, y trazan paralelos a su política kurda. Por ejemplo, el presidente de la ALE, el corso François Alfonsi, pide la intervención de la UE. El Consejo Europeo debe detener inmediatamente los juicios en curso de políticos catalanes presos porque son "presos políticos". Exige exactamente lo que acusa a sus oponentes: pide interferencia política en los casos judiciales en curso, aunque sólo los jueces independientes pueden examinar las acusaciones.

Si España hubiera seguido siendo un régimen dictatorial desde la muerte de Franco en 1975, no habría habido elecciones parlamentarias anticipadas en Cataluña. El gobierno español incluso permitió que los políticos encarcelados y exiliados regresaran como los principales candidatos para la elección. Y eso, a pesar de que no habían abandonado sus objetivos inconstitucionales de escindir Cataluña. Así que pudieron presentarse como ganadores en la noche de las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Más precisamente, la posición separatista perdió dos escaños. Los partidarios de la "candidatura de la unidad nacional" (cat. Candidatura d'Unitat Popular, CUP), un partido de orientación anarquista-nacionalista, perdieron un total de seis de sus 10 escaños anteriores. El verdadero ganador en esa noche electoral fue el partido cívico Ciudadanos / Cuitadans. Sus 36 diputados luchan por la supervivencia de Cataluña en España y por una reforma del sistema de autonomía (Riedel 2018, p. 1).

Sin embargo, los 4 diputados restantes de la CUP en el parlamento regional siguen siendo el fiel de la balanza. A principios de 2016, los parlamentarios de la CUP aseguraron que Puigdemont reemplazara a Artur Mas como presidente de la Generalitat. Hasta el día de hoy, se aferran a su ídolo y quieren que sea su nuevo jefe de gobierno en todas las circunstancias. Desde principios de febrero de 2018, cuando se supo que Puigdemont no podía ser elegido debido a su ausencia, la CUP impidió con éxito la elección de un candidato de compromiso del partido JxCat de Puigdemont (Juntos por Cataluña). En la discusión estuvieron inicialmente su portavoz Elsa Artadi y finalmente el portavoz del depuesto gobierno regional Jordi Turull.

¿Campaña electoral de Alemania?

La decisión de la CUP de no apoyar a Jordi Turull en la primera votación (22.3.2018) es difícil de entender al principio, porque Turull es uno de los acusados del movimiento de independencia. Su arresto poco después de la derrota electoral, casi fuera del parlamento, disparó además el mito del sacrificio catalán. Pero la CUP no quiso dar al gobierno central ninguna razón para disolver inmediatamente el parlamento regional debido a su elección. Con su boicot de formar un gobierno, parece querer seguir la estrategia de un mayor retraso. Porque con esta votación, comenzó el plazo estatutario de 60 días. Sólo entonces se pueden programar nuevas elecciones si no se ha elegido un nuevo ministro-presidente.

Al mismo tiempo que el arresto de Turull, Pablo Llarena, juez de instrucción de la Corte Su-

prema española, emitió órdenes de arresto europeos. Se dirigieron a seis exfuncionarios del gobierno catalán que se encontraban en Bélgica, Gran Bretaña y Suiza, incluido Carles Puigdemont. Esto, sin embargo, frustró los planes de la CUP para establecer un "Consejo de la República" (en catalán, Consell de la República) como un "gobierno en el exilio" (CUP 28.2.2018). Desde el municipio belga de Waterloo, un suburbio de Bruselas, Puigdemont, como presidente catalán en estado de espera, debía continuar promoviendo la aceptación del proyecto de independencia.

Después de ser arrestado el 25.3.2018 en la frontera germano-danesa, Puigdemont se preparará para una campaña electoral desde Berlín en lugar de Bruselas. Inmediatamente después de su liberación de la prisión en Neumünster, llamó a sus compañeros combatientes en Barcelona para hacer presidente a Jordi Sánchez. Sin embargo, esta propuesta no pudo ser tomada en serio. Al fin al cabo, Sánchez está también en prisión. El expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC, en catalán, Assemblée Nacional Catalana) es también el jefe ideológico y organizador del movimiento de independencia. Su nombramiento, por lo tanto, sólo puede interpretarse como una provocación adicional a la dirección de Madrid y como un intento de retrasar las nuevas elecciones.

Alemania sería más adecuada como escenario político que Bélgica para una campaña electoral de todos modos. En Bruselas, los aliados flamencos de los separatistas catalanes se encuentran bajo una gran presión. El N-VA es actualmente el partido más fuerte en el Parlamento belga. La coalición multipartidista que dirige podría romper un compromiso abierto para las demandas de independencia catalanas y hundir al país en una crisis gubernamental. En Alemania, sin embargo, los partidos de la red de la ALE hasta ahora tienen poca influencia: tanto el partido bávaro como los frisianos y la Asociación de Votantes del Sur de Schleswig están en elecciones siempre por debajo del listón del 5 por ciento. Es por eso que sólo están representados por cláusulas de excepción en los días de país. Sus demandas abiertas o encubiertas de soberanía (Bayernpartei, 3.10.2017) no se perciben en absoluto o se consideran irrelevantes. Ya que el federalismo alemán ofrece a las regiones y municipios una amplia gama de derechos políticos para legislar conjuntamente.

Por otro lado, esto significa que la población alemana otorga gran importancia al autogobierno regional y reacciona con sensibilidad a las medidas unilaterales estatales centralistas o federa-

les. Pero esto sólo no explica la amplia simpatía por el separatismo catalán que es visible en los medios de comunicación. Además de los vascos, los catalanes tienen más derechos de autonomía que todas las demás regiones de España. El mito de la supremacía española, por lo tanto, no puede sustentarse con referencia al Estatuto de Autonomía. Más bien, se alimenta de una hostilidad fundamental hacia el estado. Las instituciones estatales centrales no son vistas como legítimas, sino como un instrumento de opresión.

¿"Judicialización" del conflicto?

En este sentido, la CUP también habla de una "liberación nacional y social de los países catalanes" (CUP 2018). En esta formulación, se asume que el estatus de Cataluña como nación separada es indiscutible y posicionado en contra de las estructuras nacionales o regionales existentes en España. Sin embargo, tal brecha no existe porque los catalanes han sido autónomos durante unos 40 años. Su gobierno regional asume gran parte de la responsabilidad del desarrollo social y económico de Cataluña. Esto demuestra incluso en el tema de los ahorros. Desde la crisis española de 2012, el ministro catalán de Economía y Hacienda se ha visto obligado a recortar los gastos. Por ejemplo, Oriol Junqueras de la Izquierda Republicana (ERC) recientemente declaró en un congreso de negocios que el gobierno regional ha logrado ahorros de 3,91 mil millones de euros, un resultado récord en la comparación española (Ara, 30.5.2017).

Debido a que la alianza de los tres partidos separatistas, que aún buscan un primer ministro adecuado, refleja todo el espectro político, le resulta difícil criticar al gobierno central en áreas de políticas concretas como la política fiscal. Por lo tanto, las demandas de los separatistas para la independencia apenas contienen argumentos sustanciales. En cambio, los partidarios de la soberanía enfatizan la "legitimidad" política de su gobierno regional. Por otro lado, Madrid no puede ser disuadida de su curso de aislar el separatismo por todos los medios legales. Por lo tanto, existe la "legalidad" de las decisiones políticas dentro del marco de la constitución actual. Esto explica en parte por qué el conflicto secesionista ha pasado del nivel político al legal. Como la reubicación de este lugar juega en manos de quienes desean preservar el estado en su conjunto, los partidos separatistas acusan de una "judicialización de la política" (La Vanguardia, 18.10.2016).

Esta crítica oscurece el hecho de que el propio movimiento de independencia ha tomado el ca-

mino de la "legalización". Los inicios de esta estrategia se remontan al expresidente catalán Artur Mas. En el otoño de 2012, Mas disolvió prematuramente el parlamento regional para hacer de las nuevas elecciones un plebiscito. Prometió llevar a Cataluña a la independencia en 2020. Después de su reelección, a principios de 2013, fundó una junta asesora judicial de 15 miembros (en catalán, Consell Assessor per a Transició Nacional, CATN), que se encargó de preparar la transferencia de competencias del gobierno central a la región. Esto debería proporcionar un marco legal para el referéndum de independencia previsto. Sin embargo, esto no tuvo éxito, con el resultado de que el referéndum, que se consideró inconstitucional, se reclasificó desde el 9 de noviembre de 2014 a un referéndum no vinculante (Riedel 2014, p. 11).

Cuando Carles Puigdemont fue elegido presidente a principios de 2016, asumió la estrategia de su predecesor. El objetivo declarado era utilizar la competencia legislativa regional para crear estructuras paralelas cuasi estatales. En una entrevista, Puigdemont (Die Welt, 5.6.2016) explicó:

"Nos emancipamos de España y hacemos nuestras propias leyes. Estamos en el proceso de construir las estructuras del nuevo estado, debemos tener seguridad jurídica, teniendo en cuenta los tratados internacionales, eso es más de 3000 acuerdos, que también se aplican a nosotros".

Como resultado, se deben aprobar "leyes de desacoplamiento", sobre la base de las cuales se deberían crear nuevas estructuras, por ejemplo, para la seguridad social propia y para un Ministerio de Asuntos Exteriores de Cataluña. Debido a la escasa mayoría, se requirió una enmienda al Reglamento del Parlamento catalán.

Desde que se aprobó la reforma parlamentaria el 26 de abril de 2017, el gobierno regional puede presentar sus proyectos de ley en una sola lectura. La oposición fue eliminada efectivamente (EiTB, 26 de abril de 2017). Ahora deben confiar en el respaldo del Tribunal Constitucional español si quiere defender su voz democrática. Pero incluso fuera del parlamento, la resistencia de una mayoría previamente silenciosa contra la independencia está creciendo. En 2014, varias organizaciones se unieron para formar la "Sociedad Civil Catalana" (SCC), con el fin de dar a los defensores de la estancia de Cataluña en España una voz sin partido (Societat Civil Catalana).

Cataluña: boicot en lugar de diálogo.

Así, el reproche de los separatistas a la dirección de Madrid, de judicializar el conflicto de Cataluña recae en ellos. Además, este concepto pretende distraer el hecho de que ellos son los actores que ignoran los valores democráticos en esta disputa tan pronto como estos valores se interponen en el camino de su objetivo de una secesión de Cataluña. Por esta razón, sus demandas no tienen la necesaria "legalidad" o, en el contexto de un sistema legal democrático, la necesaria "legitimidad" política de su lado.

Esta evaluación también se aplica a la preparación y realización del referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017. Sólo con el apoyo de la CUP, el gobierno de Puigdemont podría aprobar un proyecto de ley de referéndum a principios de septiembre. Para ello tendría una escasa mayoría en una sola sesión parlamentaria. Según el Estatuto de autonomía, se habría requerido al menos un quórum de dos tercios de los Miembros (Estatuto de 19.7.2006, Artículo 222). El resultado de la votación también parece dudoso. No fue auditado ni confirmado por observadores independientes, ni la aprobación del 90 por ciento con sólo el 42,3 por ciento de participación es suficiente para legitimar la declaración de independencia del 10 de octubre de 2018.

A pesar de que los tres partidos separatistas afirman su disposición al diálogo, desde el otoño de 2012 dictaron las condiciones: ya no les preocupa el aumento de sus derechos de autonomía, sino las modalidades de una secesión. Exigen al gobierno central un diálogo que cuestione el orden constitucional. Para esto Rajoy no tiene mandato del votante. Madrid sólo puede ofrecer al gobierno regional catalán que negocie una reforma de financiación junto con las otras 16 comunidades automáticas de España. Esto es lo que realmente hizo el gobierno central, como parte de la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas. En su conferencia anual a mediados de enero de 2017, después de largas y duras negociaciones con el gobierno central, los presidentes de las regiones decidieron sobre un "nuevo modelo de financiamiento regional" (El País, 17.1.2017). Los presidentes de Cataluña y del País Vasco, Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu, sin embargo, se negaron estas conversaciones y boicotearon la reunión.

Los catalanes y los vascos han evitado hasta ahora toda cooperación en la comisión parlamentaria, que actualmente está revisando el sistema español de autonomía y desarrollando propuestas de reforma. Así, la primera reunión de esta

llamada comisión territorial (territorial española) se produjo a mediados de noviembre de 2017 sin los 17 diputados de los separatistas catalanes en el parlamento español. Es cierto que la Comisión podría terminar con la mayoría de dos tercios necesaria para lograr un nuevo orden de financiación entre Madrid y las regiones a través del parlamento español. Sin embargo, en una situación tan tensa, las diferencias de opinión entre partidos políticos pueden llevar rápidamente a la ruptura. Así que los socialistas ven este proyecto como una oportunidad para una reforma constitucional mucho más fundamental, mientras que los conservadores que gobiernan, ven en su lugar una forma de frenar sus esperanzas.

La Comisión experimentó un revés a fines de marzo de 2018, cuando Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, canceló su cooperación de su partido. Acusa a los socialistas de hacer concesiones al nacionalismo catalán. Querían hacer de la nación española una "nación de naciones" (Diario de Ibiza, 20.3.2018). Según los socialistas, a los catalanes se les debería otorgar el estatus de nación propia junto con los españoles. Rivera teme que esto dividirá a los españoles como una comunidad política de valores en grupos lingüísticamente culturalmente diferenciados. De hecho, esto resultaría en una reinterpretación étnico-nacionalista del concepto de nación política y alimentaría aún más la disputa sobre las fronteras regionales existentes y el reconocimiento de idiomas oficiales (Riedel 2018, p. 7).

El egoísmo de los vascos

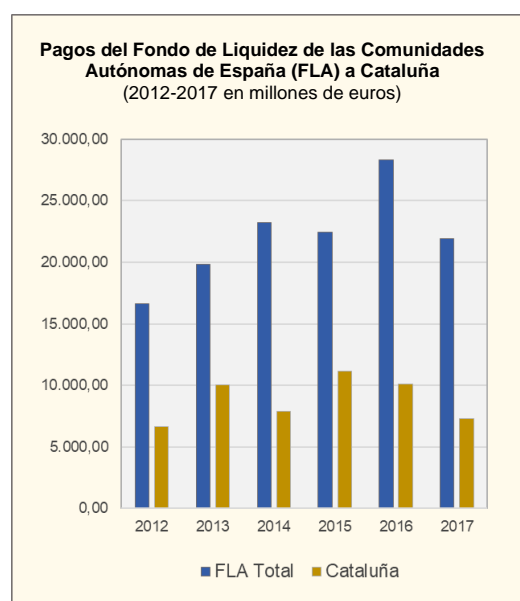
Finalmente, el trabajo de la Comisión del Territorio se ve eclipsado por otro conflicto, la disputa sobre el nuevo presupuesto estatal para 2018. El Primer Ministro Rajoy se enfrenta a un gobierno minoritario y debe hacer concesiones. Pero este año ya no puede contar con el apoyo de los cinco miembros del Partido Nacional Vasco (PNV). Expresan su solidaridad con los separatistas catalanes y exigen el restablecimiento del Estatuto de Autonomía (El Mundo, 2.4.2018). Sólo podían ser disuadidos por concesiones políticas.

En una inspección más cercana, el apoyo de los vascos para el depuesto gobierno regional catalán no se basa en la solidaridad en el sentido de una conexión política y económica entre las dos regiones. Los vascos están preocupados principalmente por su propia ventaja financiera. Y esto, en última instancia, podría ser mayor para ellos si también encuentran su camino hacia la soberanía en la corriente del separatismo catalán. Ya en 2003, el entonces primer ministro vasco, Juan José Ibarretxe, había presentado un concepto

político para hacer del País Vasco un estado independiente. En un primer paso, el PNV exigió el reconocimiento de los vascos como nación separada (El País, 25.10.2003). Solo tres años después, los catalanes adoptaron esta agenda al presentar un nuevo Estatuto de Autonomía al Estado Central, identificándose como una nación separada (Estatuto, 19.7.2006, preámbulo). Estos y otros cambios resultaron después inconstitucionales.

También en el tema de la autoadministración financiera, Barcelona analiza el modelo vasco. Para el País Vasco y Navarra fueron capaces de asegurar privilegios tras la democratización después de 1975 en comparación con las otras regiones españolas. Sus autonomías se basan en derechos forales, que incluyen sus propios poderes financieros y fiscales. Las otras comunidades autónomas, por otro lado, deben pagar primero los impuestos que han recibido al gobierno central antes de recuperar su dinero a través de la igualación fiscal regional. Este estatus especial explica por qué los gobiernos regionales vasco y catalán están mostrando poco interés en un proyecto de reforma a nivel nacional. Porque temen estar peor después de un cambio de este sistema de autonomía asimétrica. Existen modelos federales que muestran que, bajo el paraguas de una nación española común, podría haber soluciones donde todos ganen (Riedel 2016).

Figura 1:



Fuente: Compilación propia basada en Fondo de Liquidez Autonómica, Wikipedia; Los expertos urgen al Estado a cortar el grifo de liquidez a las comunidades, El País, 3.2.2018, (consultado el 27.4.2018; todavía activo en 2.10.2020).

¿Solidaridad europea con quién?

Una reforma del sistema de autonomía español está por lo tanto aún en las estrellas. Sin embargo, no hay alternativa significativa. Una secesión de Cataluña o del País Vasco causaría un gran daño económico para todos. Este problema es minimizado por los defensores. Sin embargo, las negociaciones de Brexit en particular muestran que una separación económica puede ser mucho más costosa de lo que se mostró inicialmente. Esto es "sólo" sobre la salida del Reino Unido del mercado interno europeo. En el caso de Cataluña, se dividirá un área económica que ha ido creciendo durante siglos.

La estrecha integración de las comunidades autónomas de España es particularmente evidente en la igualación fiscal regional. Debido a que las regiones hasta ahora no han podido ponerse de acuerdo sobre ninguna reforma conjunta, el sistema de 2009 sigue vigente. Después de eso, la mitad de los impuestos recaudados, por ejemplo, del impuesto sobre la renta y el valor añadido, regresan a las regiones. Esto financiará servicios públicos como la educación, la salud y los sistemas sociales. Sin embargo, como las necesidades de las regiones son mucho mayores, las comunidades autónomas se han endeudado con los inversores privados. Sin embargo, esto sólo funcionó hasta la crisis del año 2012, cuando los mercados financieros cerraron el grifo del dinero. Desde entonces, las comunidades piden prestados los fondos necesarios al gobierno central, que los transfiere a bajos tipos de interés. El monto total de estos préstamos ha aumentado en los últimos seis años a alrededor de € 232 mil millones. Sólo Cataluña cuenta con 70,9 mil millones, lo que corresponde a una participación del 30 por ciento (*El País*, 17.2.2018). Esto es más alto que la contribución de Cataluña al producto interior bruto español, que representa el 19 por ciento (*IfW 2017*, p. 15). La Figura 1 muestra las necesidades anuales de Cataluña de fondos del Fondo Regional de Liquidez (FLA) estimados en alrededor 9,4 mil millones de euros en 2018.

En el caso de una secesión, el nuevo estado catalán nacería con una montaña de deuda. Entonces dependería completamente de donantes externos en lugar de la ayuda nacional. Cuando se trata de las ideas del movimiento de independencia, Cataluña debe mantenerse a un estatus especial en la UE y son suministrados por el BCE en los créditos (i Paluzie Hernández 2015, p 199). Así que los separatistas esperan la solidaridad de los otros miembros de la UE y la interpretación

creativa del Tratado de la UE y los criterios de Maastricht para limitar la deuda pública.

Incluso si Cataluña pudiera esperar tal apoyo europeo, una separación de Madrid no sería amigable, sino que estaría acompañada por una disputa sobre la división del total de la deuda española. Si Cataluña escapara a tales compromisos de deuda, como lo amenazó anteriormente el ex ministro de Economía y Finanzas, Oriol Junqueras, la deuda pública de España aumentaría del nivel actual del 100% al 124% del PIB. Los modestos éxitos de las políticas de austeridad de los últimos años se habrían destruido (*WiWo*, 9.9.2017). Para evitar una recaída en una crisis económica y financiera, se necesitarían nuevos recortes en salarios y beneficios. Finalmente, al contribuyente europeo también se le exigiría asumir los riesgos de los nuevos préstamos del BCE. En este punto a más tardar, la solidaridad de los ciudadanos de la UE se agotará. Por lo tanto, los políticos europeos deben dejar claro a los catalanes que, como miembros de la eurozona, tienen una gran responsabilidad y primero están obligados a mostrar solidaridad a nivel nacional antes de que puedan esperar solidaridad de Europa.

Fuentes y literatura adicional

- Paluzie i Hernández, Elisenda, Das Potential eines eigenständigen Kataloniens«, in: Krystyna Schreiber (Hg.), Die Übersetzung der Unabhängigkeit. Wie die Katalanen es erklären, wie wir es verstehen, Dresden 2015, S. 185–202.
- Riedel, Sabine, *Katalonien im Brennglas der EU-Krisen*. Das Patt nach den Regionalwahlen vom 21.12.2017 ist ein Signal an Europas Reformer, in: *Forschungshorizonte Politik & Kultur*, 1/2018
- Riedel, Sabine, *Separatismus: Katalonien ist nur der Anfang*. Steigendes Konfliktpotential von Unabhängigkeitsbewegungen in der Europäischen Union, in: *Forschungshorizonte Politik & Kultur*, 8/2017.
- Riedel, Sabine, *Föderalismus statt Separatismus*. Politische Instrumente zur Lösung von Sezessionskonflikten in Europa, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2016 (SWP-Studie 5/2016).
- Riedel, Sabine, *Die Befragung zur Unabhängigkeit Kataloniens (9.11.2014)*. Ergebnisse, Hintergründe und Herausforderungen für Europa, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2014, SWP-Arbeitspapier, FG Globale Fragen, November 2014.
- Statut, Parlament de Catalunya*, Grundgesetz 6/2006 vom 19. Juli zur Novellierung des Autonomiestatuts von Katalonien.
- [Publicación posterior: Riedel, Sabine, *¿Movimientos separatistas en la UE?* Cómo el separatismo se apodera del concepto de paz de Europa y pone en peligro, FPK, Vol. 3, No. 4 (2019 June 26), 8 p.]

